Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a doce de marzo de dos mil veinticinco.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión número **00940/INFOEM/IP/RR/2025**, interpuesto por el **C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX**,en lo sucesivo el **Recurrente**, en contra de la respuesta del **Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez**,en lo subsecuente el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S**

**PRIMERO. De la solicitud de información.**

En fecha veintidós de enero de dos mil veinticinco, el **Recurrente**, presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX),** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número de expediente **00106/NAUCALPA/IP/2025**, mediante la cual solicitó lo siguiente:

*“Oficios firmados por a C. Marcia Pérez Mireles del 1 al 15 de enero de 2025” (Sic)*

**MODALIDAD DE ENTREGA:** A través del SAIMEX.

**SEGUNDO. De la respuesta del Sujeto Obligado.**

De las constancias que obran en el sistema **SAIMEX**, se advierte que en fecha seis de febrero de dos mil veinticinco, el **Sujeto Obligado** emitió la respuesta en los siguientes términos:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Con fundamento en el art. 12 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y Municipios. Envió oficios solicitados con folio del 001 al 036 con fecha de 7 de enero de 2025 al 15 de enero de 2025 No. De Oficio Fecha No. De Oficio Fecha DOP/001/2025 07/01/2025 DOP/018/2025 13/01/2025 DOP/002/2025 07/01/2025 DOP/019/2025 13/01/2025 DOP/003/2025 07/01/2025 DOP/020/2025 13/01/2025 DOP/004/2025 07/01/2025 DOP/021/2025 13/01/2025 DOP/005/2025 08/01/2025 DOP/022/2025 13/01/2025 DOP/006/2025 09/01/2025 DOP/023/2025 13/01/2025 DOP/007/2025 09/01/2025 DOP/024/2025 13/01/2025 DOP/008/2025 09/01/2025 DOP/025/2025 13/01/2025 DOP/009/2025 09/01/2025 DOP/026/2025 13/01/2025 DOP/010/2025 09/01/2025 DOP/027/2025 15/01/2025 DOP/011/2025 09/01/2025 DOP/028/2025 15/01/2025 DOP/012/2025 09/01/2025 DOP/029/2025 15/01/2025 DOP/013/2025 09/01/2025 DOP/030/2025 15/01/2025 DOP/014/2025 09/01/2025 DOP/031/2025 15/01/2025 DOP/014-A/2025 09/01/2025 DOP/032/2025 15/01/2025 DOP/015/2025 09/01/2025 DOP/033/2025 15/01/2025 DOP/016/2025 09/01/2025 DOP/034/2025 15/01/2025 DOP/017/2025 10/01/2025 DOP/035/2025 15/01/2025*

*ATENTAMENTE*

*Lic. Daniel Taboada Elías” (Sic).*

**TERCERO. Del recurso de revisión.**

Inconforme con la respuesta por parte del **Sujeto Obligado**, el ahora **Recurrente** interpuso el presente recurso de revisión en fecha diez de febrero de dos mil veinticinco, el cual fue registradoen el sistema electrónico con el expediente número **00940/INFOEM/IP/RR/2025**, en el cual aduce, las siguientes manifestaciones:

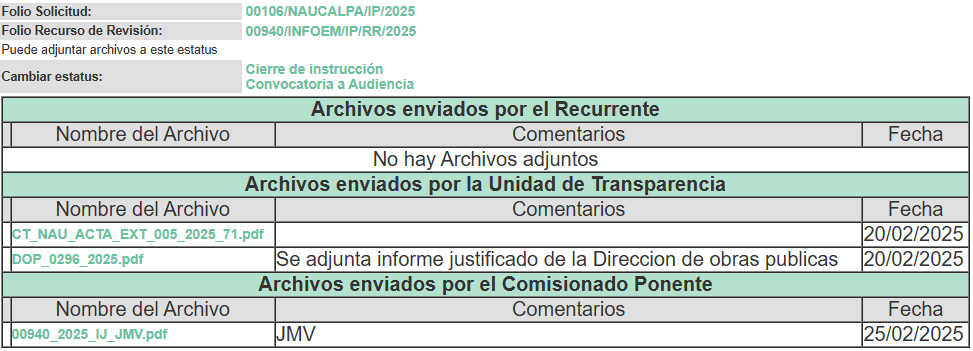
1. **Acto Impugnado:** *“Omisión en la entrega de la información solicitada” (Sic).*
2. **Razones o Motivos de Inconformidad**: “*No ponen a mi disposición la información solicitada, el Lic. Daniel Taboada, únicamente se limita en proporcionarme un listado de oficios, sin embargo, no los adjunta; circunstancia que, violenta mi derecho humano de acceder a la información que, conforme a la Ley deben poner a disposición. El actuar del Municipio junto con el Lic. Taboada es una verdadera vergüenza, yo voté por un cambio y así es como nos pagan !!!!” (Sic).*

**CUARTO. Del turno del recurso de revisión.**

Medio de impugnación que le fue turnado al Comisionado Presidente **José Martínez Vilchis**, por medio del sistema electrónico, en términos del arábigo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, del cual recayó acuerdo de admisión en fecha trece de febrero de dos mil veinticinco, determinándose en él, un plazo de siete días para que las partes manifestaran lo que a su derecho corresponda en términos del numeral ya citado.

**QUINTO. De la etapa de manifestaciones y/o alegatos.**

Una vez transcurrido el término legal referido se destaca que, el **Sujeto Obligado** rindió su informe justificado mediante los archivos electrónicos denominados *“CT\_NAU\_ACTA\_EXT\_005\_2025\_71.pdf”* y *“DOP\_0296\_2025.pdf”*; mismos que, fueron puestos a la vista del particular mediante Acuerdo de fecha veinticinco del mismo mes y año; asimismo, se aprecia que la parte **Recurrente** tampoco no realizó alegatos, ni ofreció pruebas o manifestaciones, lo anterior de conformidad con la siguiente imagen:



**SEXTO. Del cierre de instrucción.**

Así, una vez transcurrido el término legal, permitió decretarse el cierre de instrucción en fecha cuatro de marzo del año en curso, en términos del artículo 185, Fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el ahora Recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. De los alcances del Recurso de Revisión.**

Anterior a todo debe destacarse que el recurso de revisión tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente y será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

Ya que no fue interpuesto de forma extemporánea, no se está tramitando ante el Poder Judicial Federal, no es una consulta, o trámite en específico, ni tampoco se advierte que el recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, por lo que al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio, este Órgano Garante de la Transparencia se avoca al análisis del fondo del asunto que nos ocupa.

Resulta procedente la interposición del recurso de revisión, ya que se actualiza la causal de procedencia señalada en el artículo 179, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Así las cosas, al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio por este Resolutor, se procede al análisis del fondo de los asuntos en los siguientes términos.

**TERCERO. Del estudio de las causas de improcedencia.**

El estudio de las causas de improcedencia que se hagan valer por las partes o que se advierta de oficio por este Resolutor debe ser objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto ya que el estudio de los presupuestos procesales sobre el inicio o trámite de un proceso genera eficacia jurídica de las resoluciones, más aún que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia la cual impide su estudio y resolución cuando una vez admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseer el recurso de revisión sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines[[1]](#footnote-1).

Por lo que una vez que se analizó el expediente en estudio se cae en la cuenta de que no se actualiza ninguna de las casuales a continuación transcritas:

*“****Artículo 191.*** *El recurso será desechado por improcedente cuando:*

*I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley, a partir de la respuesta;*

*II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial de la Federación algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;*

*III. No actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;*

*IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley;*

*V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;*

*VI. Se trate de una consulta, o trámite en específico; y*

*VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.”*

Ya que no fue interpuesto de forma extemporánea, no se está tramitando ante el Poder Judicial Federal, no es una consulta, o trámite en específico, ni tampoco se advierte que el recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, por lo que al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio, este Órgano Garante de la Transparencia se avoca al análisis del fondo del asunto que nos ocupa.

Así las cosas, al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio por este Resolutor, se procede al análisis del fondo de los asuntos en los siguientes términos.

**CUARTO. Del estudio y resolución del asunto.**

Ahora bien, se procede al análisis del presente recurso, así como al contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para así estar en posibilidad este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el artículo 8, de la Ley de Transparencia local.

En este sentido nuestro estudio versará en determinar si la información remitida mediante respuesta, colma el derecho de acceso a la información solicitado por laparte **Recurrente**, para ello analizaremos lo solicitado y la información proporcionada.

**REQUERIMIENTOS SOLICITADOS:**

1. Oficios firmados por la C. Marcia Pérez Mireles del periodo comprendido del 01 al 15 de enero de 2025.

Por lo que, el **Sujeto Obligado** emitió su respuesta en donde únicamente enlistó los oficios solicitados con folio del 001 al 036 con fecha de 7 de enero de 2025 al 15 de enero de 2025, de conformidad con lo siguiente:

| **Número de Oficio** | **Fecha de oficio** |
| --- | --- |
| **DOP/001/2025** | 07/01/2025 |
| **DOP/002/2025** | 07/01/2025 |
| **DOP/003/2025** | 07/01/2025 |
| **DOP/004/2025** | 07/01/2025 |
| **DOP/005/2025** | 08/01/2025 |
| **DOP/006/2025** | 09/01/2025 |
| **DOP/007/2025** | 09/01/2025 |
| **DOP/008/2025** | 09/01/2025 |
| **DOP/009/2025** | 09/01/2025 |
| **DOP/010/2025** | 09/01/2025 |
| **DOP/011/2025** | 09/01/2025 |
| **DOP/012/2025** | 09/01/2025 |
| **DOP/013/2025** | 09/01/2025 |
| **DOP/014/2025** | 09/01/2025 |
| **DOP/014-A/2025** | 09/01/2025 |
| **DOP/015/2025** | 09/01/2025 |
| **DOP/016/2025** | 09/01/2025 |
| **DOP/017/2025** | 10/01/2025 |
| **DOP/018/2025** | 13/01/2025 |
| **DOP/019/2025** | 13/01/2025 |
| **DOP/020/2025** | 13/01/2025 |
| **DOP/021/2025** | 13/01/2025 |
| **DOP/022/2025** | 13/01/2025 |
| **DOP/023/2025** | 13/01/2025 |
| **DOP/024/2025** | 13/01/2025 |
| **DOP/025/2025** | 13/01/2025 |
| **DOP/026/2025** | 13/01/2025 |
| **DOP/027/2025** | 15/01/2025 |
| **DOP/028/2025** | 15/01/2025 |
| **DOP/029/2025** | 15/01/2025 |
| **DOP/030/2025** | 15/01/2025 |
| **DOP/031/2025** | 15/01/2025 |
| **DOP/032/2025** | 15/01/2025 |
| **DOP/033/2025** | 15/01/2025 |
| **DOP/034/2025** | 15/01/2025 |
| **DOP/035/2025** | 15/01/2025 |
| **DOP/036/2025** | 16/01/2025 |

Es así que derivado de la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado**, el **Recurrente**, interpuso el presente recurso de revisión, señalando sustancialmente como sus razones o motivos de inconformidad, lo siguiente: *“No ponen a mi disposición la información solicitada, el Lic. Daniel Taboada, únicamente se limita en proporcionarme un listado de oficios, sin embargo, no los adjunta; circunstancia que, violenta mi derecho humano de acceder a la información que, conforme a la Ley deben poner a disposición. El actuar del Municipio junto con el Lic. Taboada es una verdadera vergüenza, yo voté por un cambio y así es como nos pagan !!!!” (Sic).*

Por lo que, en la etapa de manifestaciones, el **Sujeto Obligado** a través de los archivos electrónicos denominados *“CT\_NAU\_ACTA\_EXT\_005\_2025\_71.pdf”* y *“DOP\_0296\_2025.pdf”*; remitió lo siguientes números de oficio, firmados por la Servidora Pública inmersa en la solicitud de información:

**DOP/001/2025**; **DOP/003/2025**; **DOP/004/2025**; **DOP/005/2025**; **DOP/006/2025**; **DOP/007/2025**; **DOP/008/2025**; **DOP/009/2025**; **DOP/010/2025**; **DOP/011/2025**; **DOP/012/2025**; **DOP/013/2025**; **DOP/014/2025**; **DOP/015/2025**; **DOP/016/2025**; **DOP/018/2025**; **DOP/019/2025**; **DOP/020/2025**; **DOP/021/2025**; **DOP/022/2025**; **DOP/023/2025**; **DOP/024/2025**; **DOP/025/2025**; **DOP/026/2025**; **DOP/027/2025**; **DOP/028/2025**; **DOP/029/2025**; **DOP/030/2025**; **DOP/031/2025**; **DOP/032/2025**; **DOP/033/2025**; **DOP/034/2025**; **DOP/035/2025** y **DOP/036/2025**.

Adicionalmente, adjuntó el acuerdo con número **CT/NAU/ACTA-EXT-005/2025/071**, de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual, aprobaron la clasificación confidencial parcial y la versión pública de los oficios **DOP/004/2025**; **DOP/006/2025**; **DOP/018/2025**; **DOP/019/2025**; **DOP/021/2025**; **DOP/023/2025**; **DOP/024/2025**; **DOP/026/2025**; **DOP/032/2025**; **DOP/033/2025** y **DOP/034/2025**.

Ante ello, es de señalar que el artículo 4, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dispone:

*“****Artículo 4.*** *…*

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.”*

Del precepto legal invocado, se desprende, que la información generada, obtenida, adquirida, transmitida, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, será accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información.

Por su parte, el artículo 12, de la Ley de la materia establece que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información que generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven, y sólo facilitarán las que se les requiera y obre en sus archivos, en el estado en el que se encuentre, sin la obligación de generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones; tal y como se señala a continuación:

*“****Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”*

En síntesis, el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en que conste la información pública, asimismo, el artículo 24, de la Ley de la materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el derecho de acceso a la información pública.

En esta misma tesitura, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un soporte documental en cualquiera de sus formas, a saber: **expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias** de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, de conformidad con el artículo 3, fracción XI, de la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*(…)*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro* ***registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados****, sus servidores públicos e integrantes,* ***sin importar su fuente o fecha de elaboración.*** *Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

*(…)”*

Además, es importante señalar que el artículo 18, de la Ley en la materia, los Sujetos Obligados cuenta con la obligación de documentar todos los actos que derive de sus atribuciones, funciones y competencia desde su origen la eventual y reutilización de la información que generen, por lo tanto toda la información que sea generada, posea y administre, es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la misma, por lo tanto esta debe ser proporcionada siempre y cuando se halle en los archivos documentales de los Sujeto Obligados y en las condiciones que se encuentre, la cual no podrá sufrir modificaciones o procesamiento, no presentarla conforme a los interés de los particulares, como de igual forma los Sujeto Obligados no deberán de generar, resumir o efectuar cálculos o practicar investigaciones.

De la misma forma, de acuerdo al contenido del artículo 160, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra dispone:

***Artículo 160****. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.*

Sirve como apoyo a lo anterior, el criterio 09-10, emitido por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que a la letra dice:

***“Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información.****Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.” (Sic)*

Además, a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé en su artículo 23, fracción IV, que son Sujetos Obligados a Transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos que obren en su poder:

***Artículo 23.*** *Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:*

*(…)*

***IV.*** *Los ayuntamientos y las dependencias, organismos, órganos y entidades de la administración municipal;*

Expuesto lo anterior, se procede al análisis de la totalidad de las constancias que integran el expediente electrónico del **SAIMEX**, a efecto de determinar si con la información remitida por **El Sujeto Obligado** a través de su respuesta, colma lo requerido en dicha solicitud.

Atento a ello, primeramente, es importante señalar que el ahora **Recurrente** se adolece de lo siguiente:

* **No ponen a mi disposición la información solicitada…, únicamente se limita en proporcionarme un listado de oficios, sin embargo, no los adjunta…**

Al respecto, recordemos que, el particular pretende acceder a los oficios firmados por la Servidora Pública inmersa en la solicitud de información, durante el periodo comprendido del uno al quince de enero de dos mil veinticinco.

Es así que, el **Sujeto Obligado** en respuesta, sólo enlistó los oficios solicitados con folio del 001 al 036 con fecha de 7 de enero de 2025 al 15 de enero de 2025; por lo que, se advierte que la Servidora Pública referida en la solicitud de información, cuenta con las facultades para emitir diversos documentos en el ejercicio de sus funciones, así como para auxiliarse de los demás unidades administrativas y comisiones establecidas por la Ley.

Así, se puede colegir que, con el propósito de mantener comunicación entre los demás integrantes de las Unidades Administrativas, los **Titulares** emiten diversos documentos, entre los que se encuentran los oficios, circulares, etcétera; los cuales, como cualquier otro acto administrativo, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1.8, del Código Administrativo del Estado de México para considerarse válidos, en concreto con lo dispuesto en la fracción VI, en el que se establece los siguientes:

***Artículo 1.8.****- Para tener validez, el acto administrativo deberá satisfacer lo siguiente:*

*(…)*

***VI.*** *Constar por escrito o de manera electrónica indicando la autoridad de la que emane y contener la firma autógrafa, electrónica avanzada o el sello electrónico en su caso del servidor público;*

*(…)*

En ese orden de ideas, se debe resaltar que la Ley de Transparencia estatal establece lo siguiente:

***Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.*

***Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados****.*

*En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven tal circunstancia.*

*Si el sujeto obligado, en el ejercicio de sus atribuciones, debía generar, poseer o administrar la información, pero ésta no se encuentra, el Comité de transparencia deberá emitir un acuerdo de inexistencia, debidamente fundado y motivado, en el que detalle las razones del por qué no obra en sus archivos.*

En razón de lo anterior, se tiene que los sujetos obligados – *los Ayuntamientos en el caso en concreto* – están constreñidos a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y se presume que la información existe si esta deriva de dichas atribuciones, por lo que este Instituto estima que ha quedado establecido que el **Sujeto Obligado** cuenta con las atribuciones para generar los documentos solicitados por el **Recurrente**.

Por lo que, en su informe justificado, el **Sujeto Obligado** trató de subsanar lo requerido por el solicitante, remitiendo los oficios referidos en respuesta, sin embargo, de la información enviada, se advierte lo siguiente:

En primer lugar, se observa que faltan oficios, ya que, indican que enlistan del folio del 001 al 036 con fecha de 7 de enero de 2025 al 15 de enero de 2025, sin embargo, de la revisión de la documentación remitida, faltaron los oficios con folio **DOP/002/2025**; **DOP/014-A/2025** y **DOP/017/2025**; por lo que es dable la entrega de dichos documentos, de ser procedente en versión pública, con la salvedad de que, en caso de que, los oficios que se ordena su entrega, hayan sido cancelados dentro del plazo solicitado, o no se hayan generado en algún día del plazo que se ordena, bastará que así se lo haga saber el **Sujeto Obligado** a la parte **Recurrente** de manera fundada y motivada en términos de lo señalado por el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley en la materia.

En segundo plano, tenemos que, los oficios con número **DOP/004/2025**; **DOP/006/2025**; **DOP/018/2025**; **DOP/019/2025**; **DOP/021/2025**; **DOP/023/2025**; **DOP/024/2025**; **DOP/026/2025**; **DOP/032/2025**; **DOP/033/2025** y **DOP/034/2025**; se advierte una excesiva versión pública, ya que, se testaron datos que se consideran públicos, como lo son, los números de oficio inmersos en los oficios, los números de empleado, de expedientes y de contratos, así como, el número de contacto y correo electrónico de diversos servidores públicos.

Por otra parte, el **Sujeto Obligado** refirió en informe justificado, mediante el acuerdo número **CT/NAU/ACTA-EXT-005/2025/071**, de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, que aprobaron la clasificación confidencial parcial y la versión pública de los oficios; sin embargo, en dicho acuerdo, no refiere los datos fueron testados ni motiva la clasificación de los datos clasificados como Confidenciales; por lo que, se procede analizar si dichos datos son clasificados o no.

Al respecto, resulta procedente analizar si dichos datos son públicos o privados; para lo cual, el artículo 143, fracción I, de la Ley de la materia, establece que la información privada y los datos personales, concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable son confidenciales.

Asimismo, el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren confidenciales, serán una limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando:

1. Se trate de datos personales o información privada; esto es, información concerniente a una persona física o jurídico colectiva y que esta sea identificada o identificable.
2. Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 3°, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con relación el diverso 4°, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se advierte que son datos personales, la información concerniente a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable (cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico), establecida en cualquier formato o modalidad. Bajo ese contexto, se analizarán si los datos mencionados de manera enunciativa son confidenciales o públicos.

* **Nombre de particulares**

Al respecto, se considera que el nombre se integra con el sustantivo propio y el primer apellido de los padres, en el orden que, de común acuerdo determinen; asimismo es la manifestación principal del derecho subjetivo a la personalidad y atributo de esta en términos del artículo 2.3 del Código Civil del Estado de México, de tal suerte, el nombre *per se* es un elemento que hace a una persona física identificada o identificable, por lo que, **se considera un dato personal.**

Al respecto cabe señalar lo previsto en la tesis aislada número 1a. CCXIV/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, de diciembre de 2009, página 277, de la Novena Época, materia constitucional, que establece lo siguiente:

*“****DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA.*** *La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo ‘privado’. Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural.* ***Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad-.*** *A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento.* ***En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás****, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.”*

De conformidad con lo señalado, se colige que **las actividades que realicen los particulares, dentro del ámbito privado, o dentro de la esfera particular, es información que debe protegerse.**

En consecuencia, se estima que resulta procedente la clasificación del nombre de particulares en actuación dentro de su ámbito privado, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Correo electrónico particular**

El correo electrónico es un sistema de transmisión de mensajes por computadora a través de redes informáticas. Dicho dato se puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuya nomenclatura, se considera como un dato personal, toda vez que es un medio para comunicarse con la persona titular del mismo, la hace localizable e incluso identificable, al poder estar conformado por parte de su nombre o bien, fecha de nacimiento.

En ese sentido, cabe señalar que el correo electrónico que corresponda a una persona física y no así en calidad de trabajador del Gobierno, como servidor público; por lo que corresponde a un dato personal que actualiza la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Teléfono particular**

Al igual que el correo electrónico, el número asignado a un teléfono particular o celular permite localizar a una persona física identificada o identificable, ya sea a través de un dispositivo móvil o bien, en un lugar como el domicilio; por lo que, dicho dato personal es susceptible de ser clasificado como confidencial, con fundamento en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Ahora bien, es de señalar que el **Sujeto Obligado** clasificó los teléfonos de servidores públicos, sin mencionar que eran institucionales o personales, por lo que, en el segundo caso, procedería la clasificación, como se mencionó en el párrafo anterior; sin embargo, para el caso de que sea institucional, en necesario traer a colación, los artículos 70, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación el 92, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, que precisan que el número telefónico institucional de servidores públicos, guarda dicha naturaleza.

Así, para el caso de que los números correspondan al institucional de servidores públicos, deberá proporcionarlos, al no actualizar la causal de clasificación, prevista, en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Domicilio particular**

De acuerdo a lo señalado en los artículos 2.3 y 2.5 del Código Civil del Estado de México, el domicilio es un atributo de la personalidad y un derecho de las personas; además que tiene como propósito que una persona pueda establecerse temporal o permanentemente en un lugar determinado, para habitar, establecer su centro de trabajo o negocios.

De la misma manera, lo establece el artículo 29 del Código Civil Federal, al precisar que el domicilio de personas físicas**, es el lugar donde residen habitualmente, el lugar del centro principal de sus negocios, donde residan o el lugar donde se encuentren.**

En ese contexto, la dirección o domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que, permite hacerlo identificable y ubicable, propiciando que pueda ser molestado en su casa o negocio, de este modo, los datos que permiten a cualquier individuo con esfuerzos mínimos identificar el lugar de residencia o de trabajo constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas. Por lo tanto, se actualiza la clasificación, de conformidad con la fracción I, del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Firma** **de particulares**

En principio, cabe señalar que la firma corresponde de aquellas personas físicas que fueron a solicitar un trámite o servicio al Sujeto Obligado, por lo que, no se trata de empleados o servidores públicos de este, sino de particulares.

En ese contexto, la firma es considerada un dato personal, al tratarse de información gráfica a través de la cual su titular exterioriza su voluntad en actos públicos y privados; por lo que, al tratarse de un dato concerniente a una persona física, es considerada confidencial, ya que también haría identificable a los individuos en cuestión.

Además, es un dato que exterioriza su voluntad para solicitar un trámite o servicio al Sujeto Obligado; por lo que, se actualiza la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Nombre de representante legal**

Al respecto, resulta necesario señalar que las personas morales son representadas mediante personas físicas, debidamente acreditadas para realizar determinados actos a nombre de la jurídico-colectiva, por lo que, el nombre de dichos individuos no puede ser objeto de clasificación, en virtud de que la representación persigue la finalidad de dar certeza jurídica a los actos que realiza, en el presente caso, solicitar, aceptar y recibir una autorización para ocupar vialidades para carga y descarga de mercancía o insumos para una unidad económica.

En ese sentido, el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quiénes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad; por lo que, para que surtan efectos los poderes que otorgue dicha empresa bastará su protocolización ante notario público.

En esa tesitura, la representación de las personas morales se realizará por medio de representantes o apoderados, y en el caso específico de las sociedades mercantiles, dicha representación se otorgará mediante instrumento público.

Ello, toda vez que la representación legal debe ser conocida para surtir efectos ante terceros; es decir, la publicidad de la misma tiene por objeto dar certeza a quienes se relacionan con la persona jurídico colectiva representada, que las actuaciones de su representante están previamente autorizadas y que surtirán efectos legales a que constriñe cada acto.

En ese orden de ideas, se estima que si bien, el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace una persona física identificada o identificable; lo cierto es que el nombre del apoderado legal de una empresa, **es público,** toda vez que por conducto de este, una persona jurídico-colectiva realiza cualquier acto jurídico; es decir, la publicidad de dicho dato da certeza a quienes se relacionan con la persona representada, partiendo del supuesto de que las actuaciones de su representante están previamente autorizadas y que surtirán los efectos legales a que se constriñe en cada acto.

Lo anterior, se robustece con el Criterio de Interpretación, de la Segunda Época, con clave de control SO/001/2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece que el nombre del representante legal, de una persona jurídica colectiva a la cual se le emitió autorización para uso de vialidades, no es susceptible de ser clasificado como confidencial, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

* **Firma del titular o representante legal.**

Al respecto, es de señalar que la firma es considerada un dato personal, al tratarse de información gráfica a través de la cual su titular exterioriza su voluntad en actos públicos y privados; en el presente caso, dicho dato, es del representante legal o titular de la licencia o permiso de funcionamiento.

Además, en el presente caso, dicho dato es plasmado en las autorizaciones señaladas, dado que con este se acredita que fue entregado por el Municipio al titular o representante legal de la empresa que realzará una actividad económica, comercial o industrial; por lo que, guarda cierto interés público dar a conocer la firma, dado que cualquier actividad, es regulada por el Municipio de Ixtapan de la Sal dentro de su circunscripción territorial, pues ayuda a transparentar la gestión pública.

Además, otorgar la firma de la persona autorizada, a través de una licencia, permiso o autorización, permite corroborar que la exhibida en el establecimiento comercial, fue emitida efectivamente por la autoridad competente, en el presente caso, por el Ente Recurrido y **aceptada por el titular, al rubricarla.**

Así, mediante la difusión de las firmas de aquellas personas que cuentan con la licencia o permiso, permitiría una debida rendición de cuentas, pues es indispensable que se conozcan aquellos que están autorizados por parte del Municipio de Ixtapan de la Sal para realizar actividades económicas, mismas que se encuentran reguladas, por lo que, con ello se garantizaría que la sociedad tenga certeza de que **las autorizaciones colocadas en los establecimientos, puestos, tianguis o mercados, fueron efectivamente emitidos por el Sujeto Obligado y aceptadas, por el Titular de estas, y no funcionan fuera del marco de la normatividad aplicable.**

Conforme a lo expuesto, se considera que la firma de los representantes legales o titulares, solicitantes de autorización para ocupar vialidades para carga y descarga, no actualizan la causal de clasificación, establecida en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Número de empleado.**

El número de empleado es un identificador único que se asigna a cada trabajador por parte de su empleador. Este número se utiliza para llevar un registro de todas las actividades y relaciones laborales de cada empleado, así como para realizar trámites y gestiones de carácter oficial3. En México, el número de empleado es un identificador único que se asigna a cada trabajador por parte de su empleador.

Visto lo anterior, se concluye que dicho dato no es susceptible de testar, **al menos que, el número de empleado arroje datos personales**; por lo que, en el segundo caso, procedería la **clasificación**. Así, para el caso de que los números de empleado no arrojen datos personales de los servidores públicos inmersos en los oficios remitidos, , deberá proporcionarlos, al no actualizar la causal de clasificación, prevista, en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Conforme a lo anterior, se considera que el **Sujeto Obligado** clasificó datos de naturaleza pública en los oficios, por lo que, deberá entregarlos en una versión pública correcta, para atender de manera correcta la solicitud de información; para lo cual, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 168, de la Ley de la materia.

Finalmente, y en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundados los motivos de inconformidad vertidos por la parte **Recurrente**, por ello con fundamento en la *primera hipótesis* del artículo 186, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **REVOCA** la respuesta a la solicitud de información **00106/NAUCALPA/IP/2025**, que ha sido materia del presente fallo.

Por lo antes expuesto y fundado.

**SE RESUELVE**

**PRIMERO.** Se **REVOCA** la respuesta entregada por el **Sujeto Obligado** a la solicitud de información número **00106/NAUCALPA/IP/2025**, por resultar fundados los motivos de inconformidad vertidos por la parte **Recurrente**, en términos del Considerando **CUARTO** de esta resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **Sujeto Obligado** haga entrega a la parte **Recurrente** en términos del Considerando **CUARTO** de esta resolución, a través delSistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, la siguiente información:

1. De ser procedente en versión pública, los oficios faltantes referidos en respuesta *(****DOP/002/2025****;* ***DOP/014-A/2025*** *y* ***DOP/017/2025****)*.
2. La correcta versión pública de los oficios número **DOP/004/2025**; **DOP/006/2025**; **DOP/018/2025**; **DOP/019/2025**; **DOP/021/2025**; **DOP/023/2025**; **DOP/024/2025**; **DOP/026/2025**; **DOP/032/2025**; **DOP/033/2025** y **DOP/034/2025**.

*Para la entrega en versión pública deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen y se ponga a disposición del* ***Recurrente****.*

*Para el caso de la información que alguno de los oficios que se ordena su entrega referidos en el* ***numeral 1)*** *del* ***Resolutivo Segundo****, haya sido cancelado dentro del plazo solicitado, o no se haya generado oficio alguno en algún día del plazo que se ordena, bastará que así se lo haga saber el* ***Sujeto Obligado*** *a la parte* ***Recurrente*** *de manera fundada y motivada en términos de lo señalado por el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley en la materia.*

**TERCERO. NOTIFÍQUESE** la presente resolución a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)** al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO. NOTIFÍQUESE** a la parte **Recurrente** la presente resolución a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, y hágase de su conocimiento que en caso de considerar que le causa algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 196, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JMV/CCR/jasm

1. ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

   *Del examen de compatibilidad de los artículos*[*73 y 74 de la Ley de Amparo*](javascript:AbrirModal(1))*con el artículo*[*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](javascript:AbrirModal(2))***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-1)